

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Ocho (08) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 64

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (LESIVIDAD)
DEMANDANTE	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES
DEMANDADO	GRACIELA RAMÍREZ
RADICADO	76001-33-33-001-2018-00127-00

I. Asunto:

Procede el Despacho a decidir de fondo la solicitud de medida cautelar presentada por la parte demandante.

II. Antecedentes:

Mediante auto de sustanciación nro. 749 del 06 de Junio de 2018, se ordenó correr traslado a la señora **Graciela Ramírez** de la solicitud de medida cautelar invocada por la **Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones**¹.

El curador ad-litem designado el día 28 de septiembre de 2021², dentro de la oportunidad procesal, se abstuvo de emitir algún pronunciamiento al respecto, pese a haberse notificado en debida forma de la totalidad del expediente el día 25 de octubre de 2021³.

III. De la solicitud realizada por la parte demandante Administradora Colombiana de Pensiones:

Dentro del acápite del libelo introductorio, denominado: “**MEDIDA CAUTELAR**”⁴; la parte demandante solicitó la suspensión provisional de la Resolución GNR 272484 del 14 de septiembre de 2016 proferida por **Colpensiones**, mediante la cual se reliquidó la pensión de vejez en favor de la señora Graciela Ramírez a partir del 22 de julio de 2013, en cuantía a 2016 de \$2.329.931,00 y un retroactivo de \$15.671.374,00, con un ingreso base de liquidación de \$2.753.446,00 al cual se le aplicó una tasa de remplazo del 75%. Ello, teniendo en cuenta 1518 semanas de conformidad con la Ley 33 de 1985.

Lo anterior, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

-. Que la Resolución en mención, no se ajusta a derecho al encontrarse mal liquidada la pensión de vejez que devenga la señora **Graciela Ramírez**.

¹ Folio 18 del Anexo denominado “EXPEDIENTE 2018-00127” de la carpeta “EXPEDIENTE ESCANEADO” del expediente digital.

² Anexo nro. 17 del expediente electrónico.

³ Anexo nro. 020 del expediente digital.

⁴ Anexo nro. 002 del expediente digital.

Radicación: 76001-33-33-001-2018-00127-00

- Que el acto administrativo resulta contrario al ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta que bajo los parámetros de la Ley 33 de 1985, sólo se permite para la liquidación de la mesada pensional, los tiempos efectivos cotizados a entidades públicas y no los cotizados como privados o independientes.
- Que en la liquidación de la mesada pensional por un error involuntario se tomaron todos los tiempos cotizados, sin discriminar la calidad de tiempos públicos o privados (Municipio de Cali, Clínica Colsanitas S.A., Fondo de Educación Departamental del Valle del Cauca y el Ministerio de Educación), así entonces, se generó una mesada pensional superior a la que en derecho le corresponde.
- Que al reliquidar la pensión de vejez a la señora **Graciela Ramírez**, en cumplimiento de la Ley 33 de 1985 arrojando un valor de nómina para el periodo de julio de 2016 de \$2.329.931,00, valor que a la fecha 2016 corresponde a una mesada mensual por valor de \$1.7014.393,00.
- Que al haberse tenido en cuenta de manera inexacta las cotizaciones que se realizaron en calidad de trabajador privado, la prestación se liquidó con un IBL superior al que el afiliado tendría derecho únicamente con los tiempos laborados con entidades públicas (Ley 33 de 1985).
- Que realiza el estudio con los respectivos tiempos públicos y privados de conformidad con la Ley 71 de 1988, así:

AÑO	MESADA RELIQUIDADA	MESADA REAL
2013	2.065.085	1.507.985
2014	2.105.148	1.537.240
2015	2.182.196	1.593.503
2016	2.329.931	1.701.383
2017	2.463.902	1.799.213

- Que el pago de una prestación generada sin el cumplimiento de los requisitos legales, atenta contra el principio de estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones, establecido por el Acto Legislativo 001 de 2005, como una obligación del Estado.

Así entonces, argumenta que continuar con el pago de una prestación a favor de una persona que no acredita todos los requisitos para su reconocimiento, afecta gravemente su capacidad de otorgar y pagar las prestaciones a los afiliados que si tienen derecho a su reconocimiento, vulnerando como consecuencia el principio de progresividad y el acceso a las pensiones de todos los colombianos.

IV.- Oposición a la medida:

El Curador ad-litem designado para defender los intereses de la señora **Graciela Ramírez** dentro de la oportunidad procesal dispuesta para el efecto, no realizó pronunciamiento sobre la medida cautelar peticionada, como tampoco contesto la demanda.

V.- Consideraciones:

En principio, debe señalarse que, el artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo consagró la procedencia de las medidas cautelares, así:

“Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de

la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. ...”

Así mismo, el artículo 231 *ibídem* determinó cuales son los requisitos para decretar las medidas cautelares, estableciendo lo siguiente:

"Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud" (Subrayas del Despacho).

Conforme a las normas antes descritas, es claro que, en primer lugar, la medida cautelar se debe solicitar con fundamento en el mismo concepto de violación de las disposiciones invocadas en la demanda (siempre que a él se haga remisión expresa en la respectiva solicitud) o con fundamento en el escrito en que se realice la petición de la medida cautelar de forma separada, el cual debe contener una sustentación específica y propia para la procedencia de la medida cautelar y, en segundo lugar, la procedencia de la suspensión provisional de los efectos de un acto que se acusa de nulidad puede acontecer si, la violación de las disposiciones invocadas, surge, es decir, aparece presente, desde esta instancia procesal – cuando el proceso apenas comienza-, como conclusión del: i) *análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas*, o, ii) *del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud*, sin que la decisión que asuma el Juez, implique un prejuzgamiento⁵.

De otro lado, es importante resaltar que, en lo concerniente a la suspensión de una decisión de la administración, la parte que así lo requiera debe cumplir unos requisitos mínimos, entre los cuales se encuentra la sustentación debida de su solicitud, lo cual puede hacer, en el mismo escrito inicial o en el escrito que de ella haga de manera separada.

En este punto es menester señalar, que frente a la sustentación de la medida cautelar el Tribunal de Cierre de la Jurisdicción Administrativa ha indicado, que si bien el actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo habilita al juez de conocimiento para decretar la misma a partir de la confrontación que haga entre el acto, las normas invocadas como trasgredidas y las pruebas allegadas para tal fin, lo cierto es que la parte que pretenda hacer valer dicha figura jurídica debe cumplir con una mínima carga procesal que le permita al administrador judicial tener la claridad suficiente para llevar a cabo aquella valoración tanto normativa como probatoria que exige la norma en mención; es decir, que se debe indicar de forma precisa y concreta las disposiciones que se consideran infringidas, llevando a cabo la debida explicación o sustentación de los motivos por los cuales considera que se vulneran las mismas⁶.

Lo anterior, tiene como soporte garantías de rango constitucional como el derecho de defensa y contradicción de la parte contra la cual se aduce la respectiva medida cautelar, teniendo en cuenta que es a partir de los argumentos que refiera la parte solicitante, que el otro extremo litigioso tiene la oportunidad de pronunciarse frente a lo deprecado; amén de

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala. Auto de 3 de diciembre de 2012, exp. 11001-03-24-000-2012-00290-00.

⁶ Auto del 21 de octubre de 2013, Rad. 11001 0324 000 2012 00317 00, C.P. Dr. GUILLERMO VARGAS AYALA

Radicación: 76001-33-33-001-2018-00127-00

que, también representa para el operador judicial el punto de partida para identificar la controversia y definir si es necesario ordenar una medida previa con el fin de asegurar el objeto del respetivo medio de control.

Así las cosas, se tiene que para el caso de la suspensión de actos administrativos, dicha Corporación ha señalado que la sola afirmación de un presunto desconocimiento del ordenamiento jurídico no puede tenerse como válido para acceder a una medida en dicho sentido:

“(…) debe ponerse de relieve que la sustentación de la solicitud de suspensión provisional no constituye un exceso ritual, se trata de la observancia de una carga procesal en cabeza de la actora cuyo cumplimiento es el deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia y a su vez la carga que exige la ley para que, entre otras, se garantice el derecho de defensa de la entidad que expidió el acto.

*A propósito del derecho de defensa de la entidad demandada, no se puede perder de vista que la nueva codificación trajo consigo la obligación de correr traslado a la parte demandada de la solicitud de suspensión, en ese orden, **la carga impuesta para que se sustente la medida también se encuentra dirigida a que la entidad que profirió el acto conozca a ciencia cierta las razones esgrimidas por el actor para poder ejercer eficientemente su derecho de defensa. En ese contexto, no puede tenerse como sustentación de la medida cautelar la sola afirmación de que el acto administrativo desconoce normas de rango superior**”⁷ (Negrillas y Subrayas del Despacho).*

Tomando como marco de reflexión lo expuesto en precedencia, es claro que se debe exigir a quien solicita una medida cautelar, una carga en cuanto al sustento y pruebas sobre la violación de las normas que considera vulneradas, para que se pueda efectuar en debida forma el debate en ese primer momento procesal.

Por otro lado, es del caso resaltar que el Despacho no desconoce que el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 establece que la cautela de suspensión de un acto procederá “*por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado*”, no obstante, es claro que no debe confundirse la sustentación que respecto a la demanda debe hacer la parte actora, con la carga argumentativa que debe cumplirse al momento de solicitar una medida cautelar; es decir, que si el accionante decide presentar la solicitud de la medida en el mismo escrito de la demanda, debe sustentar en debida forma la misma o en su defecto, efectuar una expresa remisión a que el apoyo de la medida se soporta en el concepto de violación advertido en el libelo inicial⁸.

Aunado a lo expuesto, debe decirse que el Órgano de cierre de lo Contencioso Administrativo⁹, ha indicado que:

⁷ Ibídem.

⁸ Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 3 de marzo de 2016, radicación N° 11001-03-28-000-2016-00007-00 (2016-00007-00) C.P. dr. Alberto Yepes Barreiro, Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 26 de noviembre de 2015, radicación N° 11001-03-28-000-2015-00023-00 C.P. dra. Lucy Jeannette Bermúdez, Consejo de Estado, Sección Quinta, ii) auto del 26 de noviembre de 2015, radicación N° 11001-03-28-000-2015-00026-00 C.P. dra. Lucy Jeannette Bermúdez, Consejo de Estado, Sección Quinta, iii) auto del 4 de febrero de 2016, radicación N° 11001-03-28-000-2016-00003-00, C.P. dr. Carlos Enrique Moreno, Consejo de Estado, Sección Quinta, iv) auto del 7 de septiembre de 2015, radicación N° 11001-03-28-000-2015-00020-00, C.P. dr. Carlos Enrique Moreno, Consejo de Estado, Sección Quinta y v) auto del 5 de junio de 2015, radicación N° 11001-03-28-000-2014-00129-00 CP. Lucy Jeannette Bermúdez.

⁹ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B Consejero ponente: César Palomino Cortés, providencia del quince (15) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00032-00(3007-14).

“(…) La Constitución Política en el artículo 238¹⁰ otorgó a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la facultad de suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.

El legislador en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011-, amplió el catálogo de las medidas cautelares que en la Constitución Política¹¹ y en el Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984,¹² se referían únicamente a la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado, por uno más extenso de naturaleza preventiva, conservativa, anticipativa o de suspensión.

En cuanto a la oportunidad para solicitarlas indica el artículo 229¹³ del CPACA que, las medidas cautelares proceden antes de que se notifique el auto admisorio y en cualquier etapa del proceso, con el fin proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

Así mismo el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prevé que la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede por vulneración de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. De manera que, su procedencia está determinada por la transgresión del ordenamiento jurídico y la necesidad de proteger provisionalmente la legalidad, mientras se profiere la decisión definitiva. La norma señala expresamente lo siguiente: (…)

Según la regla precedente, podrá decretarse la medida cautelar cuando se cumplan los siguientes requerimientos: a) que así lo solicite y fundamente en debida forma la parte interesada en la demanda o con escrito anexo a la misma; b) que la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas por el actor; c) o que emerja de los medios de prueba aportados por el interesado y, d) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados.

Debe indicarse como la jurisprudencia ha resaltado, que la decisión sobre la medida cautelar de ningún modo implica prejuzgamiento, teniendo en cuenta que, se trata de «mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto»¹⁴.

¹⁰ Constitución Política. Artículo 238. La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.

¹¹ Constitución Política, artículo 138.

¹² Decreto 01 de 1984, artículo 152.

¹³ Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.

La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.¹³

¹⁴ Así lo sostuvo la Sala en la providencia de 11 de marzo de 2014 (Expediente núm. 2013 00503. Consejero ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala), al expresar que: “Con el ánimo de superar los temores y las reservas que siempre acompañaron a los Jueces respecto del decreto de la suspensión provisional en vigencia de la legislación

Radicación: 76001-33-33-001-2018-00127-00

De conformidad con el aparte jurisprudencial y las normas citadas, la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos:

- Que se trate de proceso de naturaleza declarativa.
- Que la medida cautelar se torne necesaria para proteger y garantizar, de manera anticipada y provisionalmente, el objeto del proceso.
- Que la violación surja de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud cautelar, por confrontación del acto administrativo demandado con las normas señaladas y las pruebas que soportan la solicitud.
- Prueba siquiera sumaria del perjuicio, en los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho.

Acorde con lo anterior, es a partir del análisis de los fundamentos de derecho y concepto de violación que se anuncian como trasgredidas con la expedición del acto cuyo efecto se solicita suspender, y/o del material probatorio allegado al proceso hasta la instancia procesal de la solicitud, que el juez debe determinar si resulta viable el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional.

VI. Análisis del caso:

En primer lugar, debe precisarse que si bien, la procedencia de la medida cautelar se justifica por la contravención palmaria y evidente del ordenamiento jurídico, para demostrar dicha situación la parte interesada debe efectuar un análisis de las disposiciones que se señalan infringidas con la decisión de la administración y acreditar probatoriamente la vulneración legal.

En este contexto, es claro que, para considerar la prosperidad de la solicitud de medida cautelar de suspensión del acto administrativo demandado, a la luz de lo consagrado en la Ley 1437 de 2011, es necesario que se acrediten de manera concurrente los cuatro presupuestos referenciados en líneas anteriores.

Descendiendo al caso concreto, se tiene que a través del acto administrativo demandado contenido en la Resolución GNR 272484 del 14 de septiembre de 2016, proferida por la **Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones**, se reliquidó la pensión de vejez en favor de la señora **Graciela Ramírez** a partir del 22 de julio de 2013, en cuantía a 2016 de \$2.329.931,00 y un retroactivo de \$15.671.374,00, con un ingreso base de liquidación de \$2.753.446,00 al cual se le aplicó una tasa de remplazo del 75%. Ello, teniendo en cuenta 1518 semanas de conformidad con la Ley 33 de 1985

anterior, célebre por su escasa efectividad producto de las extremas exigencias que la Jurisprudencia le impuso para salvaguardar su imparcialidad, el inciso segundo del artículo 229 del C.P.A.C.A. expresamente dispone que '[I]a decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento'. De lo que se trata, entonces, con esta norma, es de brindar a los Jueces 'la tranquilidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto sub lite' []. Una suerte de presunción iure et de iure, sobre cómo acceder a la medida no afecta la imparcialidad del Juez ni compromete su capacidad de discernimiento ni poder de decisión, que busca además promover la efectividad del nuevo régimen cautelar introducido.

La Jurisprudencia ya ha ido señalado que este enunciado debe ser visto como un límite a la autorización que se otorga al Juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o 'prejuzgamiento' de la causa []. La carga de argumentación y probatoria que debe asumir quien solicita la medida cautelar, garantizan que el Juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender esta valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia"

Radicación: 76001-33-33-001-2018-00127-00

Así las cosas, se examinará en este caso el cumplimiento o no de los requisitos previstos en la ley, para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional.

Arguye el demandante, que el acto administrativo demandado se encuentra en contra de lo contemplado por la Ley 33 de 1985, pues bajo los parámetros de esa norma sólo se permite para la liquidación de la mesada pensional los tiempos efectivos cotizados a entidades públicas. No obstante lo anterior, en la liquidación de la mesada pensional por un error involuntario se tomaron todos los tiempos cotizados, sin discriminar la calidad de tiempos públicos o privados; generándose una mesada pensional superior.

Aunado a lo anterior, manifiesta que ante lo enunciado existe un perjuicio inminente en contra de la estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones.

De los argumentos presentados, encuentra el Despacho que más que discutir la violación a disposiciones invocadas por parte del acto administrativo demandado, lo que pretende la entidad con la medida cautelar, es suspender el pago de una pensión que devenga la parte demandada, señora **Graciela Ramírez**, al considerar que la liquidación de la misma contraviene la disposición inicialmente mencionada, toda vez que se computaron.

Ello, si se tiene en cuenta que, al solicitar la **Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones E.I.C.E.** a esta instancia judicial la suspensión de los efectos del acto que reliquida la pensión de vejez de un afiliado, implícitamente se requiere la interrupción del pago total de la correspondiente mesada pensional que devenga en la actualidad la señora **Graciela Ramírez**.

Al respecto, se considera que suspender el pago de la pensión de vejez reconocida a favor de la señora **Graciela Ramírez**, por parte de la **Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones**, en esta primera instancia del proceso podría perjudicar, en parte el derecho al mínimo vital del que gozan las personas de la tercera edad; más aún, si se tiene en cuenta que el asunto sometido a discusión corresponde al Régimen pensional aplicable y a la forma en que la entidad accionante efectuó la liquidación de la misma (Pues realizó el compute de tiempos públicos y privados), aspecto que debe ser determinado previa valoración exhaustiva de las pruebas recaudadas en el curso del proceso, de cara a las normas aplicables, estas son, Ley 33 de 1985 y Ley 71 de 1988.

Por tanto, se considera que las afirmaciones planteadas por la **Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones**, llevan implícita la suspensión de la obligación de pagar el 100% de la pensión de vejez reconocida a favor de la señora **Graciela Ramírez**, lo cual no estaría acorde con las pretensiones de la demanda, pues no se cuestiona como tal el derecho pensional otorgado sino la forma en que se calculó su mesada pensional y el régimen aplicable; aspecto que requiere de un análisis probatorio y normativo que trasciende el contenido del acto administrativo que se demanda.

Acceder en este momento procesal a la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución nro. GNR 272484 del 14 de septiembre de 2016, podría constituir una decisión desproporcionada y contraria a los postulados constitucionales, pues en caso de encontrarse acreditado que al momento de efectuarse el reconocimiento pensional se incurrió en una inconsistencia normativa o en un error al momento de establecer el ingreso base de liquidación, se deberá estudiar la procedencia o no de un reajuste pensional, sin conllevar tal controversia a desconocer el derecho pensional reconocido a su favor, tal como se pretende con la solicitud de la medida provisional referida, solicitud que finalmente resulta contraria a las pretensiones de la demanda. Ello, por cuanto se dejaría sin sustento económico a la parte demandada.

Radicación: 76001-33-33-001-2018-00127-00

En definitiva, en sentir de esta juzgadora, resulta indispensable realizar un análisis jurídico en torno a las disposiciones señaladas (Ley 33 de 1985 y Ley 71 de 1988), acompañado de la práctica y valoración probatoria (Con la liquidación soporte del acto administrativo demandado y la constancia de los aportes en efecto realizados por la señora **Graciela Ramírez**) de la afirmación de ambos extremos, **ajeno a este momento procesal**, para decidir si se están violando las normas o si la motivación se ajustó al ordenamiento jurídico, sin que lo expuesto implique un prejuizgamiento y de contera, la violación del debido proceso de cara al derecho de defensa de las partes.

Así las cosas, se negará lo solicitado, habida cuenta que es indispensable realizar un minucioso análisis que, en sentir del Despacho, **corresponde al momento de emitir sentencia de fondo**, amén de que, no se cumplen los requisitos establecidos para tal fin.

Finalmente, se advierte que no se encuentra demostrada la existencia de un perjuicio irremediable, toda vez que el apoderado judicial de la parte actora al momento de formular la medida de suspensión provisional, no refirió si quiera prueba sumaria para demostrar un detrimento patrimonial que afecte la sostenibilidad financiera de la **Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones E.I.C.E.**

En síntesis, debe hacerse un estudio de **fondo y detallado**, con las pruebas aportadas al plenario, para determinar con certeza si efectivamente la **Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones**, incurrió o no en un error al momento de efectuarse el reconocimiento pensional, pues esta etapa procesal es apresurada para determinar tal situación y la existencia o no de un detrimento financiero a cargo de la entidad.

Así las cosas, al no encontrarse configurada a partir de un ejercicio de confrontación con la norma superior que se argumenta como violadas, una situación de manifiesto desconocimiento necesaria para decretar la suspensión provisional solicitada, se procederá a negar el decreto de la medida cautelar bajo análisis.

En mérito de lo expuesto, el **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali**,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de suspensión provisional del acto acusado elevada por la **Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones E.I.C.E.**, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriado este proveído continúese con el trámite del proceso.

TERCERO: Este Juzgado acatando el deber consagrado en el art. 46 de la Ley 2080 de 2021, el cual modificó el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Ministerio Público – Procuraduría Judicial 57**
Correo electrónico: procjudadm57@procuraduria.gov.co
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Radicación: 76001-33-33-001-2018-00127-00

✓ **Radicación memoriales:**

of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12

(2) 896-24-11

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

**PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ**

Firmado Por:

Paola Andrea Gartner Henao

Juez

Juzgado Administrativo

Oral 001

Cali - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2ff65249dc93f2f1c196c589466652d72a606c72f5787a2ff2dfc4e368cd1616**

Documento generado en 08/02/2022 04:21:08 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>